

Comisión debe examinar primero la cuestión de la responsabilidad de los Estados en general.

44. El Sr. MATINE-DAFTARY cree que la cuestión de la diplomacia *ad hoc* debe figurar en el programa del 12º período de sesiones. Con ello se alentaría al Relator Especial y se cumpliría lo dispuesto en la resolución 1289 (XIII) de la Asamblea General.

45. El PRESIDENTE está de acuerdo en que, habida cuenta de lo sucedido en el actual período de sesiones, no se debe establecer un orden riguroso. Sin embargo, le parece que los miembros deben tener con antelación cierta idea del orden en que se tratarán los temas y, por lo tanto, propone que los cuatro temas se coloquen en el programa en el siguiente orden provisional: 1) relaciones e inmunidades consulares; 2) responsabilidad de los Estados; 3) derecho de los tratados; y 4) diplomacia *ad hoc*. El orden no indica necesariamente el tiempo que se dedicará a cada tema.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 18 horas.

516a. SESION

Martes 16 de junio de 1959, a las 9.45 horas

Presidente: Sir Gerald FITZMAURICE

Relaciones e inmunidades consulares (A/CN.4/108, A/CN.4/L.79, A/CN.4/L.80, A/CN.4/L.82) **(continuación)**

[Tema 2 del programa]

PROYECTOS DE ARTÍCULOS PROVISIONALES RELATIVOS A LAS RELACIONES E INMUNIDADES CONSULARES (A/CN.4/108, PARTE II) (continuación)

ARTÍCULOS 14 y 15

1. El Sr. ŽOUREK, Relator Especial, presenta el artículo 14 (*Extensión de las atribuciones consulares cuando no exista una misión diplomática del Estado que envía*) y señala a la atención el comentario. Desde luego, cabe subrayar que, en derecho internacional, el cumplimiento de actos diplomáticos aislados nunca puede conferir al cónsul la condición diplomática. En el artículo 12 de la Convención relativa a los Agentes Consulares celebrada en La Habana en 1928, figura una disposición similar al artículo 14 del proyecto y en la legislación de algunos países hay disposiciones que permiten a los cónsules cumplir actos diplomáticos en ciertas circunstancias, tal como se expone en el párrafo 3 del comentario.

2. Como se ha suprimido el artículo 12 (*Relaciones consulares con los Estados y los gobiernos no reconocidos*) en atención a los deseos de la mayoría (513a. sesión, párr. 35), el alcance del artículo 14 se ha vuelto más amplio, pues trata tanto de los países que han sido reconocidos como de los que no lo han sido. Sin embargo, en principio, la cuestión del reconocimiento no debe plantearse en conexión con el artículo 14.

3. En principio, no se opone a la enmienda del Sr. Scelle (A/CN.4/L.82), pero le parece que corresponde mejor a una situación diferente: la prevista en el artículo 15, que se refiere a las funciones diplomáticas que puede desempeñar con carácter permanente un

cónsul general; en cambio, el artículo 14 se refiere únicamente a actos diplomáticos ocasionales que de ordinario cumplen las misiones diplomáticas. Tal vez el Sr. Scelle haya querido que se suprima el artículo 15, pero no lo indica en su enmienda.

4. El PRESIDENTE sugiere que, como el Sr. Scelle no está presente, su enmienda se discuta al tratarse el artículo 15.

5. El Sr. BARTOŠ dice que en derecho internacional no existe ninguna norma que disponga el cumplimiento de funciones diplomáticas por los cónsules y que tampoco es necesario proponer dicha norma *de lege ferenda*. Por lo contrario, cree que los cónsules no pueden desempeñar funciones diplomáticas sin acuerdo previo de los Estados interesados. Hace muy poco, en 1958, el Gobierno de los Estados Unidos dirigió una circular a las misiones extranjeras declarando que las personas cuya condición es la de cónsules no pueden ejercer ninguna función diplomática en los Estados Unidos ni tampoco actuar como representantes ante las Naciones Unidas. Es cierto que los cónsules desempeñaban antes estas funciones en los países en que se aplicaba el sistema de las capitulaciones, pero ahora esos mismos países se oponen enérgicamente a esta práctica. Yugoslavia tiene cónsules en países donde no tiene una misión diplomática, pero no pueden cumplir ningún acto diplomático, salvo el de servir de intermediarios para las notificaciones diplomáticas hechas en nombre del Gobierno de Yugoslavia. Una disposición relativa a la combinación de las funciones consulares y diplomáticas no es necesaria ni conveniente en una codificación del derecho de las relaciones consulares.

6. El Sr. SANDSTRÖM dice que, como el artículo 14 trata más bien de las relaciones diplomáticas, parece estar fuera de lugar en un proyecto sobre relaciones consulares. Desde luego, es evidente que los Estados pueden convenir en la extensión de las funciones consulares en las circunstancias previstas en el artículo.

7. El PRESIDENTE estima que, dado que los artículos 14 y 15 se asemejan, pueden combinarse en uno solo.

8. El Sr. ŽOUREK, Relator Especial, explica que el artículo 14 se refiere a actos cumplidos excepcionalmente sólo en caso de necesidad y no a la función diplomática normal. Estos actos no modifican en nada la condición jurídica del representante. En cambio, el artículo 15 se refiere a los casos en que, aparte de las funciones consulares, el cónsul ejerce una función diplomática permanente que le hace acreedor a los privilegios e inmunidades diplomáticos. No se opondrá a que se combinen los dos artículos si la Comisión lo prefiere, pero opina que sería mejor no hacerlo, pues tratan de situaciones jurídicas diferentes.

9. El PRESIDENTE propone que, en todo caso, la Comisión examine conjuntamente los artículos 14 y 15.

Así queda acordado.

10. El Sr. TUNKIN conviene con el Relator Especial en que las situaciones a que se refieren los artículos 14 y 15 son totalmente distintas. Los artículos pueden examinarse conjuntamente, pero no deben reunirse.

11. El artículo 14 trata de una práctica actual. En una época, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tenía en la Unión Sudafricana un cónsul general, a quien en ciertos casos se encargó de ejecutar ciertos actos diplomáticos en forma puramente ocasional, ya

que el Gobierno del Estado de residencia no formuló objeción alguna. Algunas veces se presentan situaciones en que es realmente necesario encargar al cónsul del cumplimiento de ciertos actos diplomáticos. La cuestión consiste en saber si esa práctica debe mencionarse en el proyecto. Los artículos 14 y 15 no son *jus cogens*, sino explicativos e indican que la situación no es excepcional. Los artículos deben quedar en el proyecto sobre relaciones consulares, aunque traten accidentalmente de actos que corresponden a las relaciones diplomáticas, pues dichos actos son ejercidos por cónsules y, por ende, están comprendidos en las relaciones consulares.

12. El Sr. MATINE-DAFTARY está de acuerdo con la propuesta del Presidente de combinar los artículos 14 y 15. El artículo 14 en su forma actual es demasiado ambiguo y su redacción es vaga. Algunos países aún conservan un amargo recuerdo de las actividades diplomáticas y aun políticas ejercidas por cónsules. El Relator Especial ha dicho que el artículo 14 se refiere a los actos que se cumplen únicamente en ciertos casos, pero no se establece claramente si la autorización para ejercer esos actos ha de ser provisional o, como en el artículo 15, permanente. Los casos citados en el comentario no son pertinentes. El caso del *Commonwealth* Australiano puede oponerse al caso de la India antes de emanciparse. En ese entonces, la India no podía recibir embajadores ni ministros, sino tan sólo cónsules generales que, de hecho, actuaban como ministros. El precedente australiano en realidad corresponde al artículo 15 y no al artículo 14. Los casos de Haití, Mónaco y la República de San Marino tampoco son pertinentes, puesto que estos países en realidad no pueden considerarse como Potencias y probablemente serán pocos los Estados que acrediten en ellos agentes diplomáticos plenipotenciarios. Si se conserva el artículo 14, habrá que redactarlo en forma más explícita, a fin de evitar que los cónsules ejerzan actividades diplomáticas e incluso políticas en el Estado de residencia.

13. El Sr. PADILLA NERVO dice que el artículo 15 se refiere a funciones diplomáticas que confiere a los cónsules el Estado que envía, en el caso en que los cónsules generales ejercen todas las funciones diplomáticas, mientras que el artículo 14 sólo faculta a un cónsul a comunicarse con el gobierno central si no le atienden las autoridades locales y si no existe una misión diplomática del Estado que envía. Los artículos 11 y 12 de la Convención de La Habana de 1928 son similares al artículo 14 del presente proyecto. El fondo de los artículos 14 y 15 del proyecto no es el mismo. Será preferible que los artículos queden separados y, aun cuando no se conserve el artículo 14, debe dejarse el artículo 15, puesto que su fondo figura en muchas convenciones consulares.

14. El Sr. EL-KHOURI señala que tanto el artículo 14 como el 15 ofrecen una solución especial para circunstancias especiales y pueden muy bien combinarse con ciertos cambios de redacción. No está de acuerdo con el Sr. Sandström en que esos artículos se refieren más bien a las relaciones e inmunidades diplomáticas. Es cierto que pueden figurar tanto en el proyecto sobre relaciones diplomáticas como en el relativo a las relaciones consulares; en este último explicarían en qué circunstancias especiales un cónsul puede ejercer funciones diplomáticas, y en el primero indicarían cómo puede subsanarse en ciertos casos la falta de una misión diplomática.

15. El Sr. EDMONDS dice que el artículo 14 es necesario por consideraciones de orden práctico, pero puede combinarse con el artículo 15, aunque las situaciones no sean las mismas. Con respecto a la Convención de La Habana de 1928, señala que Venezuela presentó una reserva concreta en el sentido de que dichas disposiciones eran ajenas a su tradición¹; además, otros Estados niegan toda función diplomática a los funcionarios consulares. La disposición debe redactarse con cierto cuidado, puesto que según el artículo 3 del proyecto de artículos sobre relaciones e inmunidades diplomáticas (A/3859, capítulo III), una de las funciones de la misión diplomática es proteger en el Estado de residencia los intereses del Estado acreditante y de sus nacionales. Si no se aprueba el artículo 13 del presente proyecto, pero sí el artículo 14, el resultado será que las funciones de los funcionarios consulares se limitarán en esas circunstancias a proteger los intereses del Estado que envía en el Estado de residencia.

16. El Sr. YOKOTA estima que el artículo 14 debe conservarse en el proyecto sobre relaciones e inmunidades consulares y no insertarse en el proyecto sobre relaciones e inmunidades diplomáticas. Como el establecimiento de relaciones diplomáticas no supone necesariamente el establecimiento de una misión diplomática, es muy posible que no haya una de éstas aunque las relaciones diplomáticas estén establecidas. Sin embargo, no se ha enunciado una norma con respecto a la manera cómo se han de ejercer las funciones diplomáticas en ese caso. Por eso, no hay motivo para que una disposición como el artículo 14 se inserte en el proyecto sobre relaciones e inmunidades diplomáticas. Por otra parte, ya que ese artículo faculta al cónsul para ejercer ciertas funciones diplomáticas, es importante que aparezca en el proyecto sobre relaciones e inmunidades consulares.

17. El Sr. ERIM indica que la observación del Sr. Matine-Daftary puede tenerse en cuenta mediante el empleo de la fórmula negativa que se utiliza en el artículo 16, a fin de subrayar la necesidad de que el gobierno del Estado de residencia dé su autorización. Los artículos 14 y 15 pueden muy bien combinarse a pesar de que tratan de situaciones diferentes.

18. El Sr. VERDROSS conviene con el Relator Especial en que los artículos 14 y 15 corresponden a la práctica internacional y opina que esas disposiciones deben incluirse en el proyecto sobre relaciones consulares, porque tratan de los casos en que los cónsules ejercen de modo excepcional funciones diplomáticas. No le parece que el artículo 14 se preste a abusos, como ha indicado el Sr. Matine-Daftary; el requisito expreso del consentimiento del gobierno del Estado de residencia y la condición implícita de un acuerdo especial entre los dos Estados interesados constituyen una garantía adecuada.

19. El Sr. ALFARO estima que se justifica la inclusión de los artículos 14 y 15, pero que su redacción actual parece indicar que ambos se refieren a la misma situación. Debe aclararse perfectamente en el artículo 14 que los actos diplomáticos a que se refiere serán ocasionales y tal vez convenga referirse al artículo 14 en el artículo 15. Sin duda, el Comité de Redacción podría revisar los artículos, a fin de subrayar la diferencia entre ellos.

¹ Sociedad de las Naciones, *Treaty Series*, Vol. CLV (1934-1935), No. 3582, pág. 302.

20. El Sr. ŽOUREK, Relator Especial, advierte que la Comisión parece estar de acuerdo en principio. Coincide con el Sr. Alfaro en que debe subrayarse el carácter ocasional y excepcional de los actos previstos en el artículo 14.

21. El Sr. BARTOŠ dice que no se opone a la aprobación de la propuesta del Sr. Erim.

22. El PRESIDENTE propone que los artículos 14 y 15 se remitan al Comité de Redacción para que sean revisados habida cuenta del debate.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 16

23. El Sr. ŽOUREK, Relator Especial, al presentar el artículo 16 (*Ejercicio de funciones consulares en interés de un tercer Estado*) dice que en la práctica no son raros los casos de ejercicio de funciones consulares en interés de un tercer Estado. Se refiere a la disposición en que se exige la autorización expresa del Estado de residencia. Como se señala en el comentario, la situación prevista en el artículo 16 puede presentarse en dos circunstancias distintas: cuando el tercer Estado no tiene un cónsul en el lugar, como lo prevé el artículo VI del Acuerdo de Caracas de 18 de julio de 1911, o cuando se han roto las relaciones consulares pero aún existe la necesidad de mantener ciertas funciones consulares. Como la legislación de muchos países incluye disposiciones similares, le ha parecido necesario incluir el artículo en el proyecto.

24. El PRESIDENTE estima que el principio es incontestable. Sin embargo, tal vez sea mejor colocar el artículo más cerca del párrafo 5 del nuevo artículo 2 presentado por el Relator Especial (505a. sesión, párr. 10), que tiene cierta relación con el artículo 16. Propone que el artículo sea remitido al Comité de Redacción.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 17

25. El Sr. ŽOUREK, Relator Especial, al presentar el artículo 17 (*Retiro del exequátur*) dice que el derecho de retirar el exequátur se reconoce en la doctrina y en la práctica y está previsto en muchos tratados internacionales, entre otros el artículo 8 de la Convención de La Habana de 1928.

26. Un punto que puede ser controvertible es si debe conservarse el texto actual o si debe suprimirse la segunda cláusula del párrafo 1 en que se limita el derecho ("salvo en casos urgentes . . ."). A su juicio, el texto debe quedar tal como está. En sus observaciones sobre el artículo 17, el Sr. Verdross (A/CN.4/L.79) dice que en el párrafo 2 la disposición relativa al retiro del exequátur a los representantes consulares, no debería ser más rigurosa que la que se aplica en el caso de los representantes diplomáticos. El Sr. Žourek opina que el retiro del exequátur es un acto aún más grave que el de declarar *persona non grata* a un agente diplomático, pues la situación del cónsul es muy diferente: los cónsules ejercen un gran número de funciones que exigen una relación diaria con el Estado de residencia. Sería ir demasiado lejos si se admitiera que el Estado tiene un poder discrecional para retirar el exequátur. Le parece que el artículo es equilibrado: en la primera cláusula del párrafo 1 se ofrecen todas las garantías necesarias al Estado de residencia y la condición moderada que se expresa en

la segunda cláusula tiene por objeto impedir el retiro arbitrario del exequátur.

27. Otra cuestión que puede discutirse es si el Estado de residencia está obligado a dar las razones del retiro. Recuerda que, en el caso del artículo 8 (*Denegación del exequátur*), opinó que el proyecto no puede imponer al Estado de residencia la obligación de dar razones (509a. sesión, párr. 29). Sin embargo, en este caso, como el retiro del reconocimiento oficial dado por el Estado de residencia necesariamente tendrá consecuencias graves en el funcionamiento del consulado, cree que deben darse las razones de esta decisión. Sin embargo, reserva su opinión definitiva sobre esta cuestión.

28. Refiriéndose a las enmiendas del Sr. Scelle al artículo 17 (A/CN.4/L.82), dice que en principio no se opone a que se agregue la frase propuesta al párrafo 1, aunque no le parece estrictamente necesaria. Con respecto al párrafo 3, le parece que la garantía ofrecida en el párrafo 1 es suficiente y que el nuevo párrafo propuesto por el Sr. Scelle puede incluirse en el comentario. En todo caso, la decisión sobre estos puntos deberá aplazarse hasta que el Sr. Scelle pueda presentar sus enmiendas personalmente.

29. El Sr. VERDROSS estima que el Relator Especial no ha dado razones suficientes en el comentario para justificar una diferencia tan grande entre las relaciones diplomáticas y las oficinas consulares. El ejercicio de las funciones consulares, como el de las funciones diplomáticas, presupone la confianza del Estado recibiente en la persona de que se trate. Puede haber razones que justifiquen el retiro del exequátur aun cuando el funcionario interesado no sea culpable de una infracción de las leyes del Estado de residencia. En consecuencia, cree que para dar expresión a la práctica actual, debe redactarse el artículo del mismo modo que el artículo correspondiente del proyecto sobre relaciones e inmunidades diplomáticas.

30. El PRESIDENTE señala a la atención las disposiciones pertinentes de la Convención relativa a los Agentes Consulares celebrada en La Habana en 1928 (artículo 8), la Convención de Amistad y Relaciones Consulares entre Dinamarca y Paraguay, de 18 de julio de 1903² (artículo VIII), la Convención Consular entre Italia y Checoslovaquia, de 1º de marzo de 1924³ (artículo 1, párr. 7), la Convención Consular entre los Estados Unidos de América y Costa Rica, de 12 de enero de 1948⁴ (artículo 1, párr. 4), la Convención Consular entre el Reino Unido y Suecia, de 14 de marzo de 1952⁵ (artículo 5, párr. 3) y la Convención Consular entre el Reino Unido e Italia, de 1º de junio de 1954⁶ (artículo 5, párr. 3). Estas disposiciones reflejan la práctica corriente en la materia y demuestran que, aunque difieren las modalidades de retiro del exequátur, ninguna de ellas contiene una condición expresa como la propuesta por el Relator Especial en la primera cláusula del párrafo 1. En realidad, la mayoría de esas disposiciones se re-

² Véase *Laws and Regulations regarding Diplomatic and Consular Privileges and Immunities*, Serie Legislativa de las Naciones Unidas, Vol. II (Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 58.V.3), pág. 430.

³ *Ibid.*, pág. 437.

⁴ *Ibid.*, pág. 452.

⁵ *Ibid.*, pág. 467.

⁶ British Command Paper 9193, Londres, Her Majesty's Stationery Office.

fieren a la cuestión de determinar si el funcionario consular ha dado o no motivo de queja.

31. El Sr. EDMONDS está de acuerdo en que la disposición de la primera cláusula del párrafo 1 es demasiado limitada y no se ajusta a la práctica actual.

32. El Sr. ŽOUREK, Relator Especial, dice que como la práctica en la materia no es uniforme, ha redactado el artículo como una propuesta de *lege ferenda*. Es verdad que algunos tratados consulares contienen disposiciones menos limitadas; por ejemplo, según la Convención Consular entre el Reino Unido y Francia, de 31 de diciembre de 1951⁷ (artículo 4, párr. 5), el Estado de residencia no puede denegar ni retirar un exequátur como no sea por razones graves. Si algún miembro de la Comisión desea proponer una fórmula distinta, está dispuesto a aceptarla. Señala además a la atención la Convención Consular entre los Estados Unidos de América y el Reino Unido, de 6 de junio de 1951⁸ (artículo 5, párr. 3), según la cual el Estado de residencia puede retirar el exequátur u otra autorización al funcionario consular cuya conducta haya dado motivos graves de queja y que, a petición del Estado que envía, debe darse la razón de esa revocación por vía diplomática. Este artículo ofrece otra solución al problema de la obligación de dar las razones del retiro del exequátur; sin embargo, cree que la disposición del párrafo 2 será suficiente.

33. El Sr. MATINE-DAFTARY está de acuerdo con los oradores que han criticado la primera cláusula del párrafo 1 por considerarla demasiado limitada. Puede encontrarse una fórmula más amplia que abarque todos los diferentes casos en que la conducta de los funcionarios consulares no es satisfactoria. Con referencia al párrafo 2, dice que no ve por qué deben estar obligados los Estados a comunicar las razones del retiro del exequátur; sin embargo, si la mayoría de la Comisión desea que se mantenga esa disposición, debe establecerse, ya sea en el artículo mismo o en el comentario, que sólo se darán las razones a título informativo. De ese modo se podrían evitar controversias respecto del retiro del exequátur.

34. El Sr. YOKOTA coincide con los oradores precedentes que han criticado el artículo porque limita el retiro del exequátur a los casos de infracción de las leyes del Estado de residencia. Señala que el párrafo 1 del artículo 8 del proyecto sobre relaciones e inmunidades diplomáticas no limita el derecho del Estado de residencia a declarar *persona non grata* a un agente diplomático. Puesto que los resultados de tal declaración tendrán una influencia mucho más grave en las relaciones posteriores entre los Estados interesados que el retiro del exequátur de un cónsul, no comprende por qué ha de estar más protegido un funcionario consular que un agente diplomático.

35. Tampoco puede aceptar el requisito que se fija en el párrafo 2 del artículo 17, según el cual se comunicarán los motivos del retiro del exequátur. Recuerda que el Relator Especial sobre relaciones e inmunidades diplomáticas sugirió una disposición análoga y la Comisión decidió finalmente no incluirla. No cabe duda de que existe una diferencia entre la situación de un agente diplomático y la de un funcionario consular, pero no le parece que sea tan grande

como para imponer la obligación de comunicar los motivos. Por lo tanto, sugiere que se suprima el párrafo 2.

36. El Sr. SANDSTRÖM hace suyas las opiniones del Sr. Verdross y del Sr. Yokota.

37. El PRESIDENTE es de la misma opinión. El párrafo 1 puede tener por efecto el impedir al Estado de residencia retirar el exequátur, puesto que es inusitado que un cónsul infrinja las leyes de dicho Estado. Sería mejor seguir el modelo del artículo correspondiente del proyecto sobre relaciones e inmunidades diplomáticas, o reemplazar las palabras "en el caso de que . . . cometa una infracción de las leyes de dicho Estado" por las palabras "por causa grave".

38. El Sr. PADILLA NERVO dice que tiene las mismas objeciones al respecto. Sugiere que en el primer párrafo del artículo 17 se establezca que el gobierno del Estado de residencia podrá retirar el exequátur de un funcionario consular que ha dejado de ser *persona grata* o aceptable para dicho Estado. El párrafo 2 debe corresponder a la segunda frase del párrafo 1 del texto del Relator Especial y disponer que, salvo en casos urgentes, el Estado de residencia no recurrirá a esta medida sin tratar previamente de obtener que el Estado que envía retire a dicho representante consular. Estos dos párrafos comprenderán todas las posibilidades que puedan presentarse en la práctica.

39. Por lo común, los gobiernos interesados tratan el asunto entre ellos con el fin de evitar una decisión oficial y mantener buenas relaciones. Siendo esto así, el párrafo 2 del artículo 17 es innecesario, puesto que, al tratar los gobiernos el asunto, se habrá hecho referencia a los motivos por que se solicita el retiro del cónsul.

40. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, señala que en las relaciones corrientes entre los Estados las cosas no van tan lejos como da a entender la redacción del artículo 17. Según los términos del párrafo 1, será necesario que un tribunal judicial declare culpable al cónsul. En la práctica, cuando un cónsul procede incorrectamente, la cuestión se trata con más discreción, a fin de evitar que empeoren las relaciones entre los Estados interesados. Aun en aquellos casos en que hay fundamento para condenar al cónsul, no es corriente que el Estado de residencia lo entregue a la justicia, sino que trate de que se le retire o revoque su exequátur. Una de las razones de esta práctica es la de que, aun en el caso de absolución de la demanda, el cónsul se encontrará en una situación incómoda si decide continuar en su puesto, aunque tenga perfecto derecho de hacerlo. Por lo tanto, en cualquiera de esas situaciones, no se favorecería la causa de las buenas relaciones entre los Estados interesados enjuiciando al cónsul; tampoco cree que la favorecería una disposición que se incluyera en el proyecto y pudiera alentar esa práctica.

41. El Sr. ŽOUREK, Relator Especial, señala que el derecho a retirar el exequátur ha sido limitado en las convenciones consulares más recientes, entre ellas la suscrita entre el Reino Unido y Francia (1951), el Reino Unido y los Estados Unidos de América (1951), el Reino Unido y Suecia (1952) y el Reino Unido y Noruega (1951). Por lo tanto, cree que el artículo 17 debe limitarlo en alguna forma.

42. Está de acuerdo en que un cónsul puede haber llegado a ser indeseable para el Estado de residencia

⁷ British Command Paper 8457, Londres, His Majesty's Stationery Office.

⁸ Naciones Unidas, *Treaty Series*, Vol. 165 (1953), No. 2174, pág. 128.

sin haber infringido sus leyes y, por lo tanto, no tiene objeción a que se modifique el párrafo 1, sustituyendo las palabras "en el caso de que . . . cometa una infracción de las leyes de dicho Estado" por las palabras "por causa grave", como lo ha sugerido el Presidente, o por una cláusula, tomada de las convenciones consulares, que diga: "si su conducta ha dado motivos graves de queja". También está de acuerdo con el Sr. Padilla Nervo en que se debe conservar la segunda frase del párrafo 1 y hacerla tal vez más explícita.

43. Es cierto que en la práctica esa cláusula significaría que deben darse las razones para pedir el retiro de un funcionario consular y es igualmente cierto, como ha indicado el Secretario, que por lo común se trata en una forma discreta la cuestión relativa al proceder incorrecto de un cónsul. Sin embargo, hay excepciones en que el Estado de residencia no sigue ese procedimiento y retira simplemente el exequátur sin comunicarlo previamente al Estado que envía. El retiro inesperado de un exequátur sin comunicar los motivos causará inevitablemente una tirantez entre los Estados interesados; a su entender, la Comisión contribuiría a la mayor comprensión internacional si estableciese la obligación de expresar los motivos. Por lo tanto, se pronuncia a favor de que se mantenga el párrafo 2.

44. El Sr. ERIM señala otra cuestión: si el actual proyecto se convierte en tratado, será un tratado-ley que incluirá las reglas de derecho internacional relativas a las actividades consulares. Si bien no está a favor de que el Estado de residencia tenga que comunicar los motivos del retiro del exequátur de un cónsul, en el caso de que la Comisión adoptase la opinión contraria, cree que sería mejor indicar en el párrafo 1 que podrá retirarse el exequátur cuando el cónsul sea culpable de una infracción del derecho internacional, más bien que de las leyes del Estado de residencia, puesto que algunas de éstas pueden ser contrarias al derecho internacional.

45. El PRESIDENTE estima que primero debe decidirse por lo menos una cuestión de fondo. La Asamblea General podría muy bien preguntar por qué ha sido más liberal el trato dado por la Comisión a los funcionarios consulares que a los funcionarios diplomáticos. Le parece que la Comisión debe resolver primero si es necesario emplear alguna otra fórmula en el artículo 17 que la del artículo correspondiente del proyecto sobre relaciones e inmunidades diplomáticas.

46. El Sr. PADILLA NERVO está de acuerdo con el Presidente. Es posible que se presenten casos en que un cónsul no ha infringido el derecho internacional ni la legislación nacional del Estado de residencia, pero en que su conducta haya sido tal que le haga inaceptable. Ha habido casos en que la actitud o la conducta del cónsul no correspondían a la dignidad de su cargo o en que ha abusado de ciertos privilegios. Por consiguiente, sugiere que se tome como modelo el artículo referente a los funcionarios diplomáticos, pero le parece que sería útil conservar la disposición de la segunda frase del párrafo del proyecto del Relator Especial, luego de suprimir las palabras "salvo en casos urgentes". Así modificado, el artículo determinará una mayor discreción cuando se tratan los casos de proceder incorrecto de cónsules y al mismo tiempo dará a entender, sin decirlo expresamente, que deberán expresarse los motivos.

47. El Sr. ŽOUREK, Relator Especial, dice que el retiro del exequátur de un cónsul es una medida más

grave que la de declarar *persona non grata* a un diplomático. Conviene con el Sr. Padilla Nervo en que pueden omitirse las palabras "salvo en casos urgentes".

48. El Sr. EL-KHOURI señala que son completamente diferentes las funciones de los funcionarios consulares y las de los agentes diplomáticos. El funcionario consular tiene funciones limitadas relacionadas con la aplicación de las leyes del Estado que envía; el ejercicio de las actividades que le corresponden puede ser fácilmente obstado por funcionarios locales irrazonables y necesita, por lo tanto, más protección que el agente diplomático.

49. El Sr. AGO apoya la iniciativa del Presidente de seguir lo más de cerca posible el modelo del artículo 8 del proyecto sobre relaciones e inmunidades diplomáticas. Pregunta al Relator Especial si no aceptará invertir el orden de las ideas en el artículo 17. El artículo podría comenzar con un primer párrafo en que se exprese que el Estado de residencia puede informar en cualquier momento al Estado que envía que tiene el propósito de retirar el exequátur a un cónsul porque su conducta ha dado motivo grave de queja y pedir el retiro de dicho cónsul. En un segundo párrafo se podría disponer que si el Estado que envía se niega a retirar al cónsul, el Estado de residencia podrá retirar el exequátur sin el consentimiento del otro Estado. Esta redacción sería análoga a la del artículo correspondiente sobre funcionarios diplomáticos y constituiría un procedimiento más "diplomático" de presentar la cuestión del retiro del exequátur.

50. El Sr. ŽOUREK, Relator Especial, acepta la sugestión del Sr. Ago, que es análoga a la del Sr. Padilla Nervo, y será probablemente aceptable para la Comisión. Preparará un nuevo texto de artículo 17 teniendo en cuenta esas sugestiones.

51. El Sr. TUNKIN apoya la solución que ha sido aceptada por el Relator Especial. Según su opinión, la situación del funcionario consular, en cuanto se refiere a su aceptación por el Estado de residencia, es en cierto grado análoga a la del agente diplomático. El cónsul desempeña funciones oficiales en el territorio del Estado de residencia y hay que evitar toda interpretación del texto del proyecto que pueda originar controversia entre los Estados interesados, si el Estado de residencia no considera ya al cónsul *persona non grata* y pide al Estado que envía que lo retire. La situación es la misma, *mutatis mutandis*, que la prevista en el artículo 8 del proyecto sobre relaciones e inmunidades diplomáticas.

52. Sugiere que se remita directamente al Comité de Redacción el nuevo texto que ha de preparar el Relator Especial para el artículo 17.

Así queda acordado.

ARTÍCULOS 18 Y 19

53. El PRESIDENTE sugiere que, siguiendo el precedente del proyecto sobre relaciones e inmunidades diplomáticas, se examinen los artículos 18 y 19 del presente proyecto, que se refieren ambos a la cesación de las funciones consulares, en relación con un capítulo posterior.

54. El Sr. ŽOUREK, Relator Especial, acepta este procedimiento.

Se levanta la sesión a las 13 horas.